

Parte IV

Globalización y transnacionales en América Latina

Capítulo 11

Globalización y desafíos para la seguridad humana en América Latina

Úrsula Oswald Spring

11.1. INTRODUCCIÓN

La globalización ha generado diversos efectos en América Latina: permitió la inserción del subcontinente en la economía mundial y lo acercó más a la hegemonía norteamericana. Esta inserción dio lugar a que una reducida élite se vinculara con el capital transnacional y en la actualidad, varios latinoamericanos se cuentan entre los cien hombres más ricos del mundo. Simultáneamente, la sumisión a una dinámica internacional y transnacional ha provocado graves crisis económicas en la región y la pérdida del poder adquisitivo de grandes mayorías.

El presente capítulo se pregunta ¿podría una seguridad humana más afianzada en América Latina mitigar los efectos negativos de la globalización y consolidar un proceso de crecimiento, que inclusive fortalezca la calidad de vida y el bienestar de los más vulnerables? También es pertinente preguntar ¿impedirán las políticas macroeconómicas relacionadas con la globalización y las imposiciones del FMI —con su programa de ajuste estructural (PAE)— una adaptación al modelo imperante? y ¿perdería América Latina la oportunidad de crecer y aprovechar, aunque sea algunos de los beneficios de la globalización, por su carencia de un vigoroso mercado interno? ¿Significa esto que la renta del subcontinente continuará concentrándose en unas pocas manos?,

¿que la desigualdad aumentará y la población de bajos recursos recurrirá a “estrategias de supervivencia”?, ¿que la única solución es migrar y buscar en otros países el bienestar negado en el propio? ¿Cuánto más podrían soportar los sectores depauperados y cuáles serán las salidas a una crisis mucho mayor que las socioeconómicas?

Estas preguntas son el hilo conductor de este capítulo, que analizará primero la evolución de la desigualdad como un problema estructural de la seguridad humana (11.2). Ante expectativas truncas, falta de empleo e ingresos, los jóvenes de América Latina buscarán en la migración sus oportunidades de desarrollo y consolidación, con la consiguiente pérdida de integración familiar y personal. Al emigrar, se enfrentan a la violencia, la xenofobia y la discriminación, con el consiguiente debilitamiento de su seguridad humana (11.3). Los desafíos de América Latina son complejos, porque la mitad de su población vive en la miseria, los niveles educativos son precarios y las inversiones en ciencia y tecnología son cada vez menores; no obstante, como el subcontinente con la mayor biodiversidad del mundo cuenta con un potencial natural importante que, por su abundancia, puede generar gobiernos incompetentes y proclives a la renta petrolera. Frente a cambios ambientales y socioeconómicos más globales, el gobierno, la sociedad organizada y los empresarios deben establecer pactos que garanticen la supervivencia de todos, cuyas reglas de juego serían radicalmente diferentes (11.4). En las conclusiones se explora el potencial de consolidación de la seguridad humana, como una política social que reduzca la brecha entre clases, grupos sociales y étnicos, para integrar al subcontinente en una globalización más sustentable y con rostro humano (11.5 y 11.6).

11.2 DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD HUMANA

El cambio del milenio mostró elementos positivos en América Latina.

En 2004 el PIB de América Latina creció 5.5%. Éste fue el segundo año consecutivo con tasas positivas, tras el débil crecimiento de 1999-2002. En 2004 el PIB por habitante fue equivalente al de 1997 y, si se alcanza

el pronóstico para 2005, será 3% superior al de 1997... Por segundo año consecutivo la región arrojó un saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en 2004, un saldo negativo neto en el ingreso de capitales equivalente a 1% del PIB. El comercio exterior registró un superávit de 62 mil millones de dólares, con lo que se suman tres años bajo las mismas condiciones (Furtado, 2004:130-131).

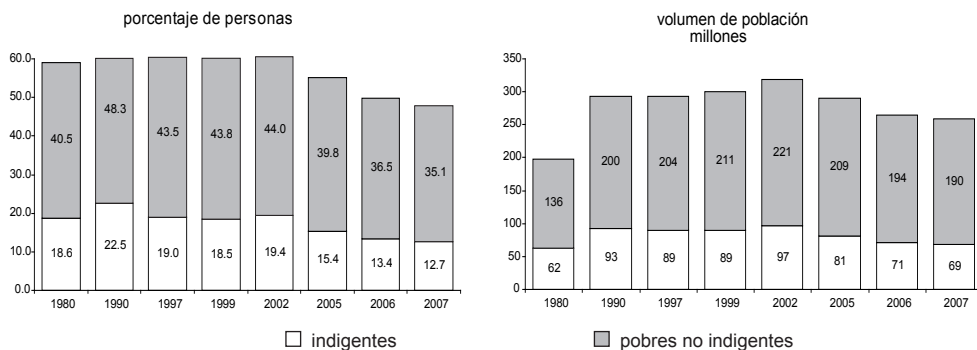
El Banco Mundial (2005) sostiene que la reducción de la pobreza está estancada. En 1981 la población en pobreza extrema (con menos de 1 dólar/día) representaba 36 millones (9.7%), y en 2001 subió a 50 millones (9.5%) como resultado del crecimiento poblacional y de las crisis económicas severas. Si se añaden los pobres (con menos de 2 dólares/día) en 1981 este grupo era de 100 millones (26.9%) y aumentó a 128 millones (24.5%; World Bank, 2005). El Banco Mundial responsabiliza de este deterioro al alto grado de concentración del ingreso, al crecimiento notable de la población y a la falta de generación de empleos formales y, por ende, a “la informalización” del empleo, a un ritmo lento y a que en la mayoría de los países hay un estancamiento del PIB *per cápita* y a otros indicadores que reflejan la desigualdad social cada vez mayor.

Los datos de la CEPAL son aún más claros. América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo (y por lo mismo cuenta con uno de los hombres más ricos del planeta)¹ con 36% de la población en situación de pobreza y 13.4% en pobreza extrema, indigencia o “pobreza perversa”, lo que ubica a 194 millones de latinos en la marginalidad y a 71 millones en la indigencia (CEPAL, 2007; gráfica 1). Aunque se ha reducido la pobreza a partir de este milenio en 3.3% anual (CEPAL, 2007), el porcentaje de marginales es todavía alto en la región y en números absolutos casi se ha estancado desde 1990. El aumento mayor en la pobreza se presentó durante las severas crisis de los ochenta, cuando casi se duplicó el número de pobres.

Los años ochenta y noventa han sido décadas perdidas para el desarrollo de América Latina (CEPAL, 1992). Esta pobreza tiene ros-

¹ Véase: Forbes Billionaires List, 2007, “Review of the World’s Billionaires According to the Forbes Business Magazine”; en <<http://www.woopidoo.com/reviews/news/rich-list/richest-people-2007.htm>>

GRÁFICA 1
Evolución de la pobreza e indigencia en América Latina

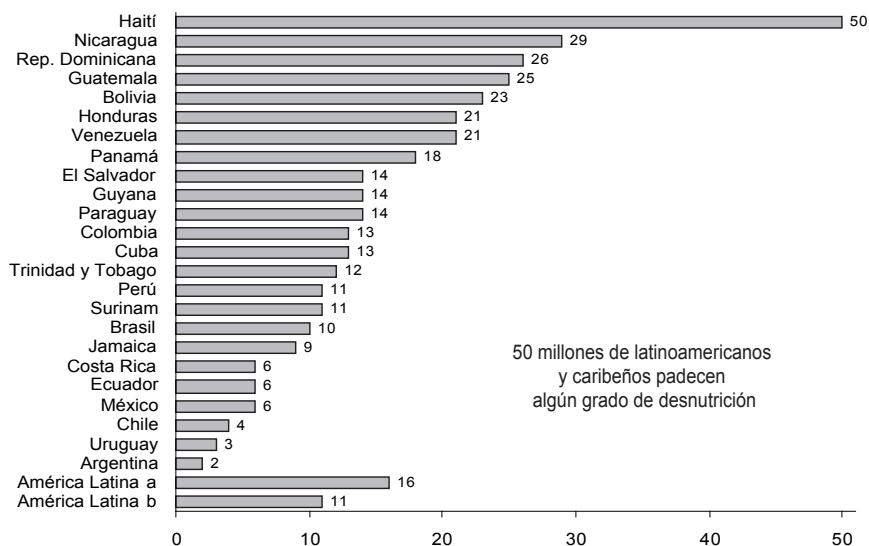


Fuente: CEPAL, 2007: 9

tros concretos y afecta especialmente a clases sociales y grupos étnicos (Strahm y Oswald, 1990; Boltvinik y Hernández Laos, 1999; Campos, 1995). Pobreza extrema, mejor definida como pobreza perversa de niños rurales e indígenas (Oswald, 1989), los priva de una oportunidad de vida futura desde antes de nacer, al sufrir daños cerebrales, a raíz de la desnutrición crónica materna-infantil (Álvarez y Oswald, 1993; Chávez, Ávila y Shamah, 2007). La gráfica 2 indica que todavía 50 millones de la población en América Latina y el Caribe sufren de hambre, sobre todo niños menores de cinco años.² Las diferencias entre países son abismales, cuyo extremo se encuentra en Haití, amenazada por gue-

² Desnutrición y hambre son fenómenos relacionados con sistemas sociales agrícolas, económicos y políticos complejos (WHO/FAO, 2003). En los países pobres las políticas presentes de alto endeudamiento con servicios de deudas impagables, la sustitución de los cultivos alimentarios locales por producción de exportación como hortalizas, frutas tropicales y flores para obtener divisas destinadas al pago de intereses; la exportación de animales en pie en lugar de productos de subsistencia y la sumisión de mercados locales al global y los monopolios internacionales; la bancarrota forzada de campesinos, pequeños productores y empresarios ante altas tasas de interés; precios internacionales artificialmente bajos (*dumping*); la revolución verde con altos costos de producción y semillas provenientes de organismos genéticamente modificados; impuestos por el agronegocio transnacional han creado desequilibrios estructurales. Adicionalmente, desastres naturales y cambio climático han obligado a la ayuda alimentaria y especialmente en países al sur del Bravo han creado nuevos mecanismos de dependencia que han expulsado a los campesinos de sus tierras.

GRÁFICA 2
Población desnutrida en América Latina y el Caribe, 1998-2000



Fuente: CEPAL, 2004 (estimaciones de la CEPAL basadas en datos de la FAO)

rras civiles, gobiernos corruptos y una isla ambientalmente destruida; pocos son sus recursos internos para superar los problemas estructurales e iniciar un proceso genuino de desarrollo. En otro extremo están Chile, Uruguay y Argentina con bajos niveles de desnutrición. En términos generales, la sociedad latinoamericana con mayor población indígena y rural es la que tiene los niveles de desnutrición más altos.

Tampoco hay duda de que la pobreza extrema de América Latina se ubica en la áreas remotas campesinas e indígenas (véase en México a Chávez, Ávila y Shamah, 2007). La situación crítica de estas regiones (Barkin, 1998) ha forzado a millones de campesinos y sus familias a abandonar su pedazo de tierra y su único patrimonio, para emigrar hacia las ciudades perdidas o arriesgar su vida en el cruce ilegal hacia Estados Unidos o a Europa. Una vez asentados en zonas de alto riesgo en las megalópolis, las condiciones socioeconómicas adversas han obligado sobre todo a las mujeres a desarrollar estrategias de supervivencia (Duque y Pastrana, 1973; Oswald, 1991, 2006, 2008) y a complementar el ingreso de su pareja para sólo poder sobrevivir en precarias condiciones.

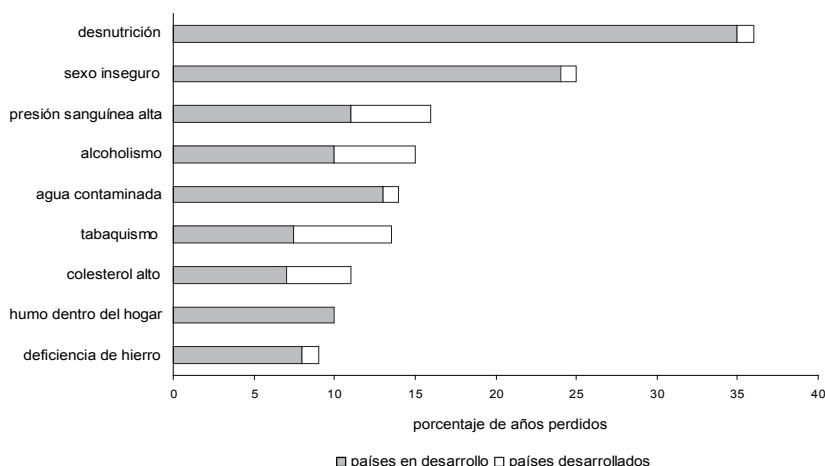
No cabe duda tampoco de que la tradicional división de trabajo entre hombres y mujeres, en la cual las mujeres cuidan el bienestar y el hogar mientras que el hombre gana el dinero, nunca ha funcionado y menos en condiciones de precariedad.

Desde los sesenta, “las estrategias de supervivencia” y “la teoría de dependencia” han evolucionado en América Latina (Marini, 1973; Dos Santos, 1978). Fueron introducidos por académicos en otras partes del mundo y han inspirado la teoría del “imperialismo estructural” de Galtung (1971) y han influido la teoría del desarrollo auto-centrado de Senghaas (1973). No obstante las críticas mundiales, los procesos de concentración de riqueza han continuado y han sido reforzados y exacerbados por los procesos de globalización regresiva.

La concentración de la riqueza en muy pocos mandos ha creado una élite pequeña que mantiene estrechas relaciones con la comunidad transnacional de negocios, pero también con los sectores poderosos en sus países (gobiernos, militares, iglesia). Estos procesos de concentración de la riqueza han generado violencia estructural y física (Galtung, 1971; Senghaas, 1973) y junto a problemas de desnutrición crónica, desnutrición (obesidad), bajos salarios y malos o insuficientes servicios de salud (WHO, 1999, 2003; WHO-FAO, 2003) han limitado y eliminado la seguridad social y humana al reducir la expectativa de vida (gráfica 3). Estos factores globales de riesgos han contribuido a la invalidez de niños y adultos y han reducido sus expectativas de vida y de bienestar en todos los países del Tercer Mundo, y por ende, en América Latina (World Bank, 1993).

Las tensiones sociales como consecuencia de condiciones de estrés se expresan en las enfermedades tradicionales de la pobreza (bajo peso, deficiencia de hierro, anemia), pero con la introducción de los alimentos transnacionales, la comida rápida y de chatarra, rica en carbohidratos, azúcares y grasas, ha surgido un cuadro simultáneo de enfermedades modernas que incluyen presión alta, padecimientos cardiovasculares, cerebrales, diabetes y colesterol alto que han complicado los cuadros de salud en todo el subcontinente. La dependencia del alcohol, drogas y otros estimulantes son indicadores de la tensión en que viven los seres humanos en América Latina. El conjunto de estas variables genera un panorama complejo y sumado a la explotación tradicional, desigualdad,

GRÁFICA 3
Factores globales de riesgos que contribuyen a aumentar la carga de enfermedades (porcentaje de años perdidos por enfermedades e invalidez)

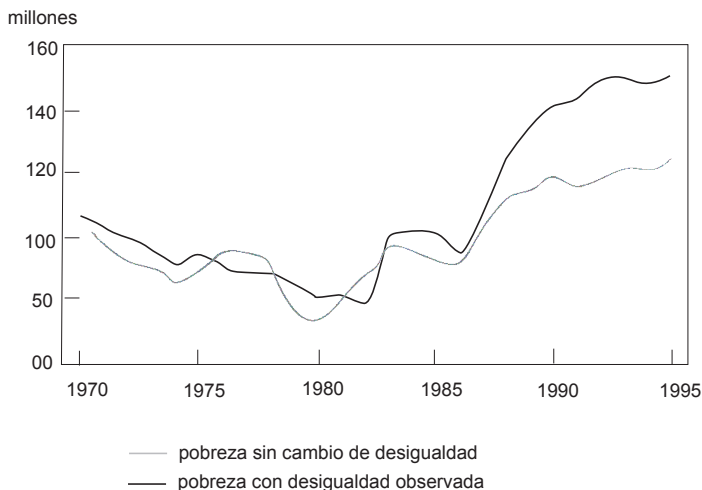


Fuente: System Standing Committee on Nutrition/ The Lancet (2006)

pobreza y violencia basada en género (vbg), son las mujeres quienes se ven obligadas a luchar con estrategias de supervivencia, al tiempo que cuidan a los hombres alcohólicos y sacan adelante a sus hijos. Estas condiciones estructurales difíciles han reforzado una amplia gama de movimientos sociales que luchan por lograr mayor equidad y condiciones de vida digna.

La explicación de esta persistente pobreza es compleja y se debe a varios factores entrelazados. Por una parte, el modelo de sustitución de importaciones por el neoliberalismo, resultado de la globalización impulsada en América Latina, ha generado un severo deterioro del ingreso; y por la pérdida del poder adquisitivo de grandes sectores sociales, aparecieron el hambre y la carestía. La falta de un gasto público anticíclico no pudo compensar esta pérdida y los programas de superación de la pobreza se hicieron de manera focalizada, lo que significó dejar de lado un número importante de personas y comunidades, en el que una política industrial exigía alimentos abundantes y baratos. La transferencia de la renta rural hacia el sector industrial-urbano y la falta de inversión del gobierno en infraestructura rural y créditos obligaron a más sectores

GRÁFICA 4
El impacto de la desigualdad en la pobreza



Fuente: Londoño, 2000: 5

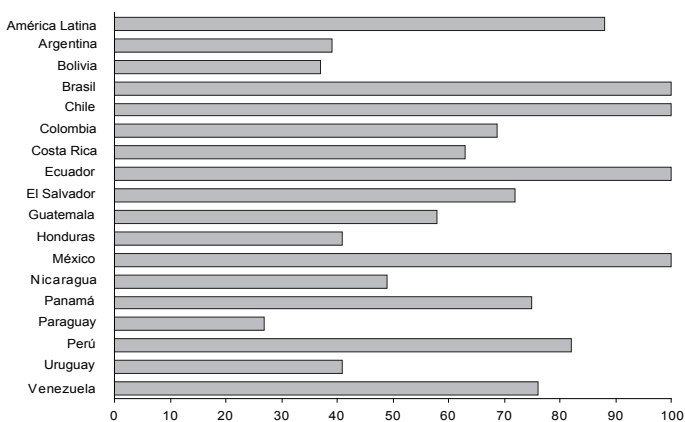
sociales a abandonar el campo y a emigrar hacia los cinturones de las grandes ciudades. La migración campo-ciudad se generaliza en América Latina y se consolidan las megalópolis de la Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, La Paz y Caracas.

Otro factor clave en la permanencia de la pobreza es la desigualdad.

América Latina, que ya tenía el dudoso rasgo de ser la región con mayor desigualdad en el mundo, con un coeficiente Gini 14 puntos por encima de lo que era de esperarse en relación con su nivel de desarrollo, vio aumentar la desigualdad de los ingresos monetarios en forma sistemática desde mediados de los ochenta, y ésta no disminuyó en los noventa (gráfica 4). Este aumento de la desigualdad fue, de hecho, el principal factor explicativo del aumento de la pobreza (Londoño, 2000:4).

Una publicación reciente de Forbes (2007) afirma que México cuenta con el hombre más rico, con 67.8 mmd y con ganancias netas en 2006 de 18 mmd. Este dato se repite en varios países; Brasil y Ecuador están considerados como países aún más desiguales (CEPAL, 2006). Los 33 multimillonarios de América Latina acumularon durante 2006

GRÁFICA 5
Avance en la reducción de la pobreza extrema 1990 a 2007



Fuente: CEPAL, 2007:13

155 mmd, mientras que 225 millones de personas sobreviven en condiciones de pobreza. De acuerdo con la FAO, 40% del ingreso total se obtiene por 10% de las empresas y sólo 5% de los más ricos cuenta con 25%, mientras que 30% de los más pobres reciben 7.5% (comparado con 14% en el resto del mundo). Según el BID (2007), México podría reducir su tasa de pobreza de 20% a 13% con una tasa sustentada de 5% de crecimiento económico durante los próximos diez años. Pero “si la distribución del ingreso pudiera recuperar los niveles de 1980, la reducción de la pobreza extrema no sería de 20 a 13%, sino de 20 a 5%”. Sin modificación de esta brecha social, la misma reducción de pobreza tomará treinta años (Lora, 2007).

Con este coeficiente Gini invariable, un número importante de países no logrará alcanzar los compromisos de las mdm. Cuando el capital no puede o no quiere mejorar las condiciones del salario y crear empleos dignamente remunerados, se requeriría de políticas gubernamentales compensatorias que redujeran drásticamente la pobreza en el subcontinente (gráfica 5). Al disminuir la desigualdad interna, casi todos los países podrían ofrecer calidad de vida a sus habitantes. Con los cambios electorales hacia gobiernos progresistas y con una mayor

conciencia de los impactos negativos de las políticas del Fondo Monetario Internacional, se calcula que Brasil, Ecuador³ y Chile están disminuyendo la disparidad interna y, como resultado, el número porcentual y absoluto de pobres ha decrecido en estas naciones. Venezuela es el caso más sobresaliente, al lograr disminuir entre 2002 y 2006 la tasa de pobreza en 18.4% y la de indigencia en 12.3%, lo que deja una tasa global de 30.2% de pobres y de 9.9% de indigentes, gracias a sus programas sociales amplios, apoyados por un crecimiento alto del PIB y el uso de la renta petrolera en programas sociales.

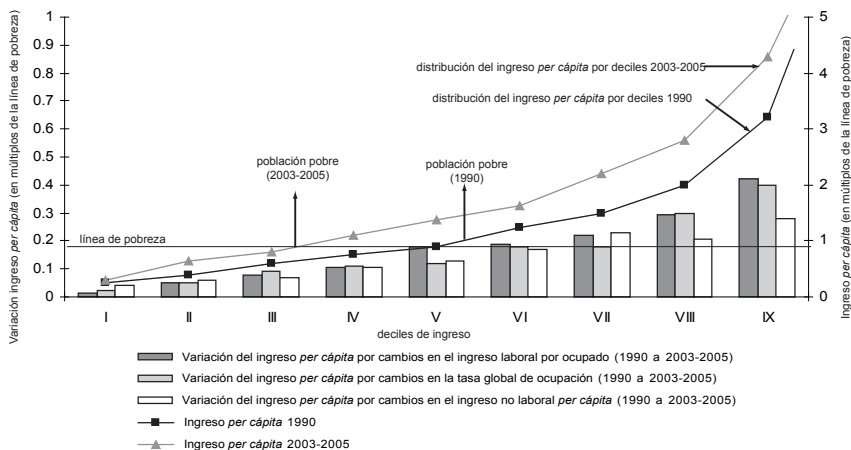
La persistencia de la pobreza está directamente relacionada con los niveles de ingreso de las capas sociales más bajas (gráfica 6), donde sólo a partir del tercer decil (en 1990 el quinto) se logró escapar a la línea de la pobreza. Por lo mismo, una política contra la pobreza tendrá que apoyarse en el fomento a los procesos productivos; crear junto con la iniciativa privada la infraestructura requerida y apoyar a sectores estratégicos (producción de alimentos), para mejorar los ingresos monetarios y en especie de los estratos sociales más bajos (gráfica 7). También se requiere de una política de combate a la pobreza y de superación de la desnutrición crónica, apoyos públicos en salud, alimentación, educación, jubilación y otros servicios de asistencia. Así el combate a la pobreza se convertiría en un proceso complejo que rebasara ampliamente los programas de focalización de la pobreza impulsados por el Banco Mundial. Obligaría a modelos integrales de mejoramiento de vida que incluyen programas como “cero hambre” en Brasil y el combate integral a la pobreza en Venezuela, donde se generan empleos dignamente remunerados, escolaridad para todos los habitantes y sistemas de salud con cobertura total. Cuba se destaca desde hace años con el mayor gasto social latinoamericano, que alcanza en 2005, 28.7% del PIB (gráfica 11, p. 493).

Al observar la gráfica 6 puede verse que la distribución del ingreso fue mejor en los ochenta y noventa y que precisamente a raíz del

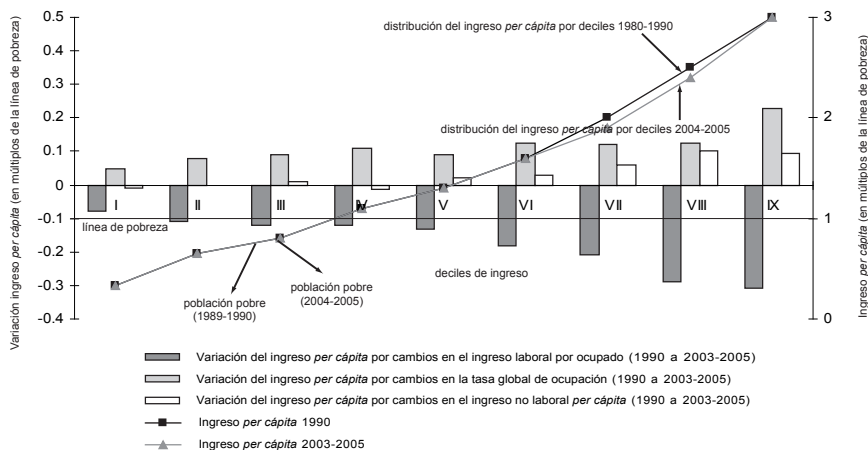
³ Ecuador anunció en marzo de 2008 que su provincia marginal del territorio amazónico Pastaza se ha convertido en la primera provincia sin analfabetismo, gracias al programa “Yo sí puedo”. Desde 2004 y con especialistas cubanos, 83 033 personas aprendieron a leer y escribir. Junto con otros ocho municipios se inició ya la segunda fase del programa, que garantiza la continuidad del aprendizaje, prácticas de lectura y escritura. El método cubano ha alfabetizado a más de tres millones de personas en América Latina, el Caribe y algunos países de África y Oceanía.

GRÁFICA 6 Determinantes en la incidencia de la pobreza (deciles I-IX)

Países que registran una fuerte reducción de la pobreza y aumentos de la productividad laboral (Brasil, Chile y Ecuador, promedio simple), 1990-2005



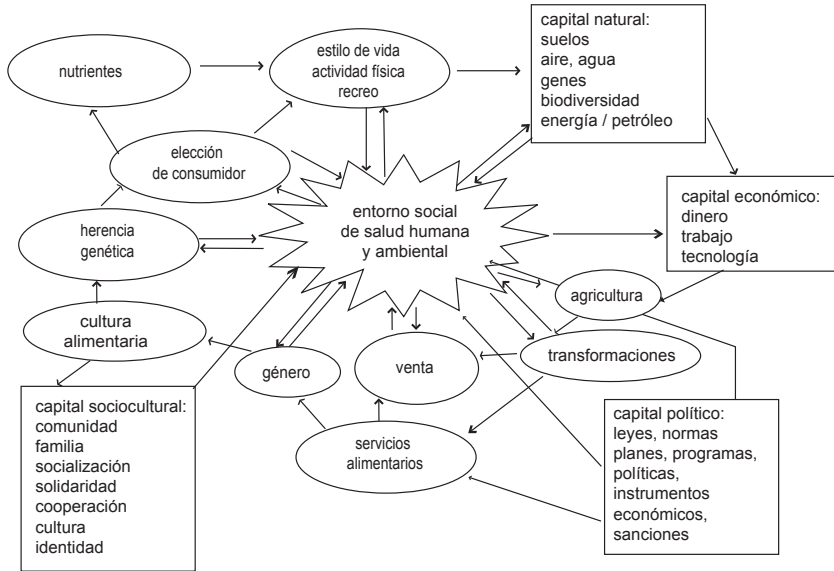
Países que no registran progresos o que registran un aumento de la pobreza (Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay, promedio simple), 1990-2005



Fuente: CEPAL, 2007: 17

modelo neoliberal, la desigualdad y la pobreza han aumentado en diversos países. Al entender los mecanismos estructurales que generaron estos desequilibrios, Chile, Venezuela, Bolivia y Brasil han instrumentado políticas públicas y fiscales que tienden a reducir estas desigualda-

GRÁFICA 7
Superación de pobreza, salud integral y desarrollo sustentable



Fuente: Lang/Hesman 2005: 39, modificado por Oswald 2007b

des. En Bolivia y Venezuela este proceso se está dando con conflictos internos, porque la burguesía criolla se niega a perder su apropiación privilegiada de la renta nacional. Además, el capital transnacional se ha aliado a estos sectores privilegiados para desestabilizar la paz interna y así mantener este modelo, injusto en todos los sentidos.

Otro problema relacionado con la indigencia se vincula con la desnutrición de la población y en particular, con la materna-infantil: genera cuadros de "pobreza perversa" (Oswald, 1990) y daños cerebrales irreversibles antes de que nazca un niño, por la desnutrición crónica de la madre (Álvarez y Oswald, 1993). Estos cuadros severos de desnutrición se presentan con anemia, lo que aumenta los riesgos de muerte durante el embarazo, parto y en tiempo de posparto, tanto del bebé como de la madre. Si a esto se añaden los embarazos de adolescentes, se genera un número de muertes materno-infantiles muy alto. Ello requiere de programas de educación, salud reproductiva, mejoramiento de ingresos y oportunidades de vida futura para la juventud, pero también programas específicos de equidad e igualdad de género que superen el machismo

y la violencia basada en el género (vbg). En países con importantes recursos naturales y humanos (Brasil, México, Colombia) es dudoso que alcancen las mdm, definidas por la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia en 1990 para todos sus habitantes, si no intensifican sus políticas de atención materno-infantil. Estas propuestas no coinciden con las del BM (World Bank, 2007), que relaciona la seguridad alimentaria con importación masiva de granos básicos y con la disponibilidad de cualquier alimento en el mercado, a costa de la subsistencia y el abandono de una política agropecuaria sólida en manos de campesinos e indígenas. Dada la pobreza generalizada, la mitad de la población no cuenta con los recursos monetarios y, por lo mismo, trata de sustituir alimentos caros y con mayor valor nutricional por aquellos más baratos, más ricos en grasas y carbohidratos. Así se consolida la desnutrición crónica, frecuentemente acompañada por obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Ante esta realidad empírica, es necesario voltear el planteamiento. La seguridad alimentaria empieza con programas de producción de alimentos básicos, una reforma agraria democrática y apoyos gubernamentales para consolidar esta política. Complementado con una canasta básica de alimentos sanos, permanentes, disponibles y a precios accesibles para todos los sectores sociales (subsídios), se garantizaría la satisfacción de las necesidades alimentarias y así, una nutrición adecuada que repercuta en un sistema inmunológico fuerte capaz de generar calidad de vida. Ello significa utilizar los cuatro capitales disponibles (gráfica 7) y entretejer un modelo complejo de política productiva, programas sociales, de empleo, fiscales y de redistribución de ingreso, controles eficaces de mercados e importaciones de alimentos faltantes. La calidad en el empleo y en los servicios con políticas agropecuarias sustentables garantizarían (a cualquier nación) una alimentación sana y un mercado interno que logre un desarrollo con calidad de vida y bienestar.

Los procesos de concentración de la riqueza en pocas manos, bajos salarios y depauperación de la población pobre, no sólo atenta contra los derechos humanos básicos de cualquier ciudadano, sino que dificulta también alcanzar los compromisos suscritos de las mdm para 2015. Por ello, los organismos multilaterales (FAO, 2000, 2005, 2006; WB, 2007: IX) insisten en una compleja estrategia que implica erradicar el

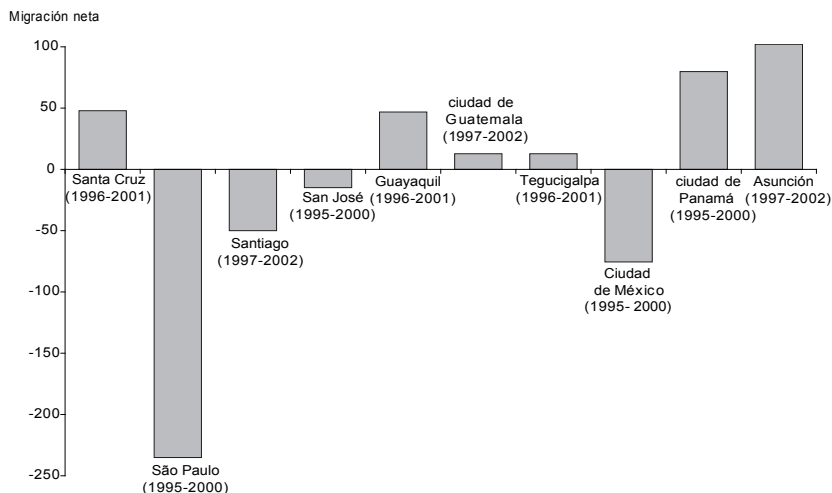
hambre y la indigencia, impulsar una educación primaria de calidad, reducir mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV-SIDA, malaria y otras enfermedades, así como consolidar la sustentabilidad en el manejo ambiental y en la cooperación en el desarrollo. Se subraya el papel fundamental de las mujeres, quienes no sólo generan en los países más pobres la mayoría de los alimentos y están a cargo de la salud familiar y reproductiva, sino que desarrollan en momentos de crisis y desastres estrategias de supervivencia.

Lo que estos organismos no mencionan son los problemas estructurales que impiden los avances en cualquier país en desarrollo. Están relacionados con sus propias políticas y los pae impuestos por el FMI: una carga desmesurada por el pago de la deuda externa, frecuentemente contraída con programas fallidos e impuestos por el propio fondo en obras de infraestructura gigantescas que no cumplen con las necesidades de los países (presas, parques industriales, oleoductos, reconversión agropecuaria). Tampoco mencionan los procesos equivocados de privatización y de rescate de bancos (Fobaproa), carreteras y otras inversiones privadas, que han transferido la renta nacional hacia la élite criolla y han socializado los errores de ésta, de los gobiernos nacionales y de las empresas transnacionales hacia el conjunto de la sociedad. Este cuadro difícil se agrava por la corrupción.

11.3 MIGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR: UN RETO PARA LA SEGURIDAD HUMANA

Desnutrición crónica, desempleo, deterioro ambiental y pérdida de calidad de vida de la población rural, y ahora, de los jóvenes urbanos, gesta condiciones de supervivencia de amplios sectores poblacionales, donde tienen que escoger entre alternativas indeseables: quedarse y sufrir por hambre, desempleo, pobreza y, en las zonas conurbadas, inseguridad pública; o emigrar hacia Estados Unidos u otros países desarrollados (en el Cono Sur han optado por emigrar preferentemente hacia España). Por su nivel educativo bajo escogen frecuentemente salir primero hacia ciudades cercanas. Los países con mayor pobreza muestran mayor migración —Guatemala, El Salvador y Honduras— especialmente,

GRÁFICA 8
Migración interna entre países selectos en América Latina



Fuente: CEPAL, 2007: 53

cuando desastres naturales (huracanes, terremotos, sequías y erupciones volcánicas) han agudizado sus condiciones de supervivencia. Pero también los dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, arrojan datos severos de migración por reformas agrarias truncas, políticas agropecuarias fallidas y apoyos sociales insuficientes. Al contrario, países con mayor política social y programas de disminución de desigualdad interna han reducido su migración rural-urbana, como Chile y Venezuela.

En cuanto a la migración interna, es importante observar que las megalópolis (São Paulo, Ciudad de México y Santiago) muestran cifras de estancamiento o decrecimiento de sus zonas metropolitanas, mientras que Santa Cruz, Guayaquil y la ciudad de Panamá siguen creciendo aceleradamente (gráfica 8). Lo mismo ocurre con las zonas conurbadas de las megalópolis, que alcanzaron ya a las ciudades colindantes y las absorben en una dinámica centrípeta de gran ciudad (tabla 1).

América Latina también expulsa población hacia países desarrollados. Esta migración externa implica altos costos a las economías nacionales, además de destruir las relaciones familiares y la cohesión comunitaria. La tabla 2 muestra que las personas no indígenas con mejor formación emigran más fácilmente. Por otra parte, en Bolivia y

TABLA 1
 Migración neta del campo a la ciudad y crecimiento de población urbana con diferentes grados de urbanización en América Latina

Países seleccionados y región	Migración neta del campo a la ciudad (1990-2000)	Crecimiento de población urbana de 10 años y más (1990-2000)	Importancia relativa de la migración rural-urbana respecto del crecimiento urbano
Chile	382 523	1 939 951	19.7
Venezuela	847 392	4 235 917	28.0
Brasil	9 483 867	26 856 666	35.3
México	4 183 486	13 103 802	31.9
Guatemala	824 486	1 384 860	59.5
Honduras	803 742	685 610	44.3
Total	19 586 438	58 344 252	33.7

Fuente: CEPAL, 2007: 52

TABLA 2
 Porcentaje de población con estudios superiores y pertenencia a etnias en diferentes países de América Latina

País	Año	Indígenas		No indígenas	
		Migrante	No migrante	Migrante	No migrante
Bolivia	2001	15.4	12.0	13.2	8.4
Brasil	2000	3.7	1.8	6.7	5.5
Chile	2002	14.6	8.8	29.2	17.7
Costa Rica	2000	5.3	2.8	12.8	10.1
Guatemala	2002	1.6	0.7	6.8	5.8
México	2000	4.2	2.2	13.4	8.8

Fuente: CEPAL, 2007: 54

Chile hay alta emigración indígena, mientras que en México, Guatemala y Costa Rica sale más bien la población no indígena. Un estudio reciente de *The Economist* (5 de enero, 2008:1-15) evalúa los costos de esta pérdida de fuerza de trabajo en la mejor edad productiva, y generalmente se trata de personas con estudios. Mientras que la población con poca educación emigra de manera ilegal y paga en la frontera de México y Estados Unidos entre 1 000 y 3 000 USD, en la de Marruecos y España cuesta entre 5 000 y 6 000 USD (*ibid.*: 10); los profesionistas cuentan con facilidades en los países desarrollados.⁴ Esta fuga de cerebros arrebató a los países pobres una mano de obra de alta calificación,

⁴ Australia y Suiza cuentan con 24% de personas nacidas fuera del país; Canadá, con 19%; Alemania y Estados Unidos, con 13%; Suecia, 12%; Irlanda, 11%; Reino Unido, 10%; y Francia, 8% (*The Economist*, 2008:6).

además de cargar los costos de capacitación de estos especialistas a sus presupuestos limitados.

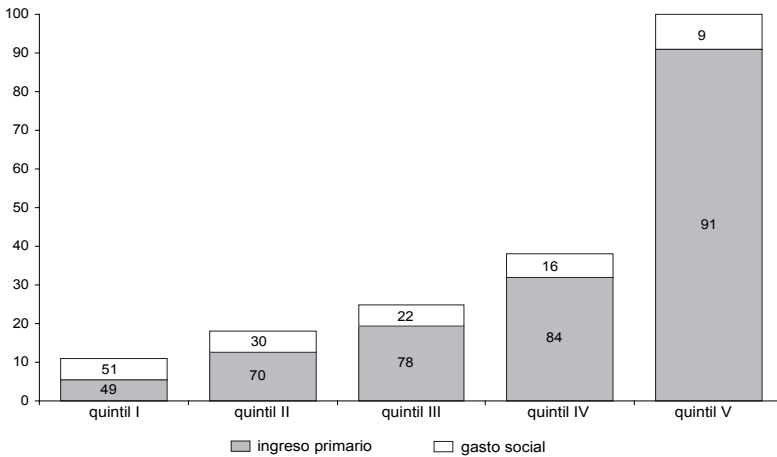
Otros especialistas argumentan que una vez de regreso en su país de origen, esta población entrenada aporta dinamismo y prosperidad, además de que las remesas se convierten en un detonante de desarrollo en múltiples países del mundo. Se calcula que en 2006 estas remesas a Asia fueron de 115.8 mmd; de 68.1 hacia América Latina; de 61 a Europa; de 38.9 a África; y de 17.6 mmd a Medio Oriente, lo cual da un total de 301.4 mmd por año (UNFPA, 2007). Finalmente la OCDE (2005) informa que los países de atracción son Estados Unidos,⁵ Europa, Arabia Saudita y África del Sur, mientras que los expulsores son México, Centroamérica, India, China, Filipinas y África del Norte.

11.4 DESAFÍOS PARA AMÉRICA LATINA: POLÍTICA SOCIAL, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ADAPTACIÓN ANTE CAMBIOS GLOBALES

En América Latina, al igual que en otros países del Sur, el impacto redistributivo del gasto público social es fundamental entre los estratos sociales más bajos, dado que representa la mitad de su ingreso (gráfica 9). En esta fase de transición y superación de la pobreza (Cortés, Hernández, Hernández Laos, Székely y Vera, 2003), el Estado debería compensar la falta de ingresos y bienestar de la población, aunque en términos absolutos este gasto es menor al del quintil V más rico, el cual sólo equivale a 9% del ingreso total, que para los estratos más bajos representa su supervivencia. Por lo mismo, América Latina —al igual que otras regiones en desarrollo— no puede prescindir de políticas claramente definidas de seguridad humana y de apoyo gubernamental para superar la pobreza. Entre los sectores más vulnerables y de extrema pobreza se encuentran mayormente mujeres-jefas de hogar, madres solteras, indígenas y cada vez más ancianos que no disponen de una jubilación para vivir con dignidad su vejez. Todos estos sectores requieren de políticas gubernamentales compensatorias y de ingresos adicionales

⁵ Esto no es un proceso nuevo, ya que se estima que entre 1820 y 1920 más de 60 millones de europeos habían emigrado al Nuevo Mundo, mientras que hoy día los emigrantes legales e ilegales en todo el mundo se estiman en 200 millones.

GRÁFICA 9
Impacto del gasto social redistributivo en 18 países
de América Latina según deciles de ingreso (%)

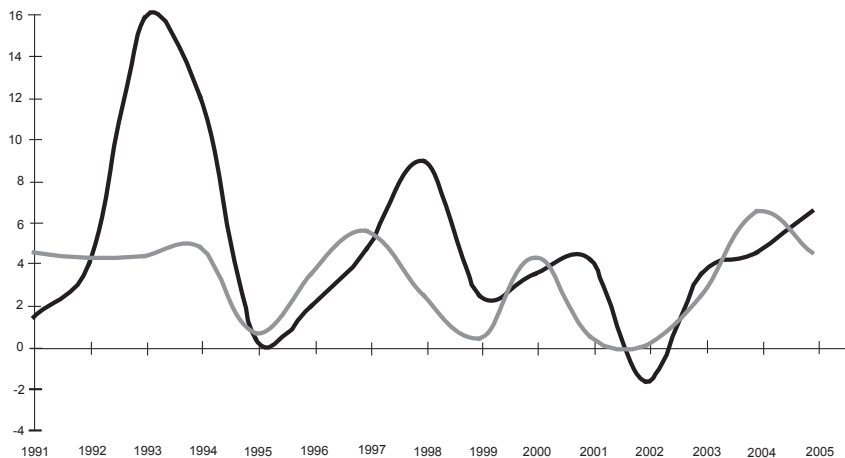


Fuente: CEPAL, 2007: 31

para integrarse plenamente a la globalización con rostro humano en el siglo XXI.

El gasto social total de América Latina pasó de 12.9 a 15.9% entre 1991 y 2005. A lo largo de estos quince años existe menos variabilidad en el gasto público, aunque la variación anual del PIB refleja las reiterativas crisis a las cuales ha sido expuesta la población latinoamericana (gráfica 10). Sus fuertes contrastes permiten clasificar tres grupos de países (gráfica 11): el gasto público social en la región aumentó casi 10% entre 2002-2003 y 2004-2005 al llegar a 660 dólares por habitante (en precios reales de 2000). No obstante, existen todavía diferencias entre los países: el gasto por habitante es quince veces mayor en el país que más fondos canaliza, comparado con aquel que menos invierte. De veinte países incluidos, doce gastan menos de 350 dólares/*per cápita*/año; seis gastan entre 550 y 870 dólares, y sólo dos superan los mil dólares. En el periodo 2004-2005 y en términos de porcentaje del PIB, la región destinó en promedio 15.9% al gasto público social: Cuba, 28.7%; Brasil, 22.0%; Argentina, 19.4%; Bolivia, 18.6%; Uruguay, 17.7%; Costa Rica, 17.5%. Del otro extremo están Paraguay con sólo 7.9%; República Dominicana, 7.1%; Ecuador y Guatemala, 6.3%; El Salvador, 5.6%. En

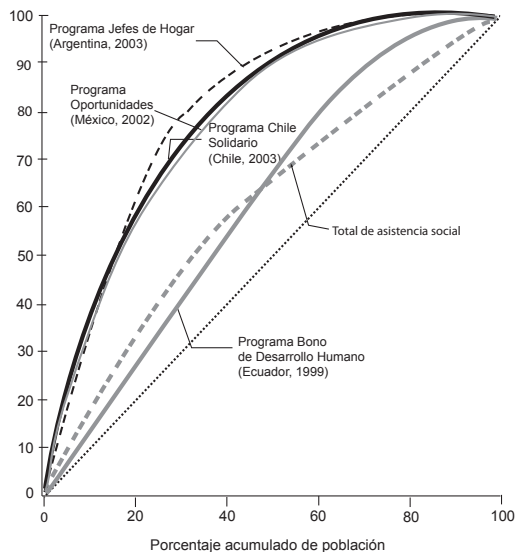
GRÁFICA 10
Variación anual en el gasto social y en el PIB



Fuente: CEPAL, 2007: 26

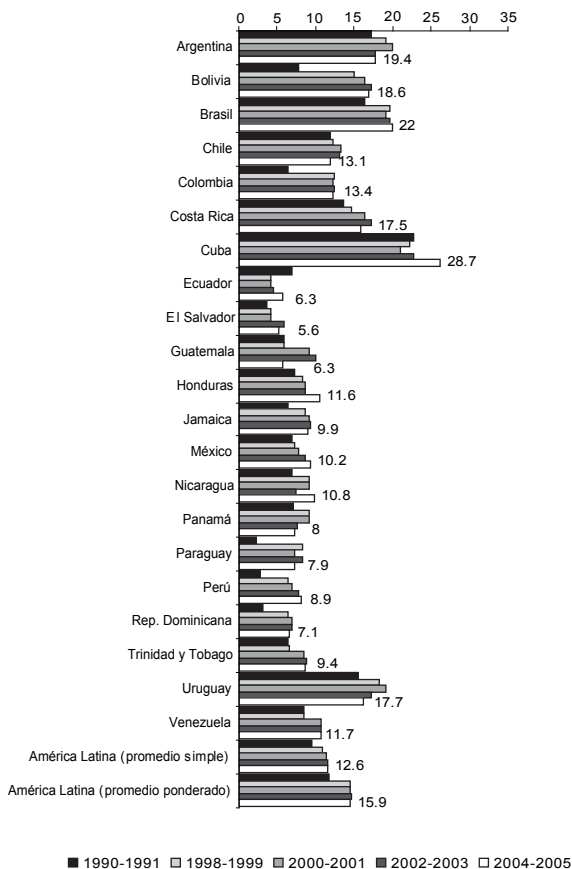
GRÁFICA 11
Distribución del gasto público según quintiles de ingreso primario en países de América Latina

Porcentaje acumulado de gasto



Fuente: CEPAL, 2007: 30

GRÁFICA 12
Gasto público social como porcentaje del PIB

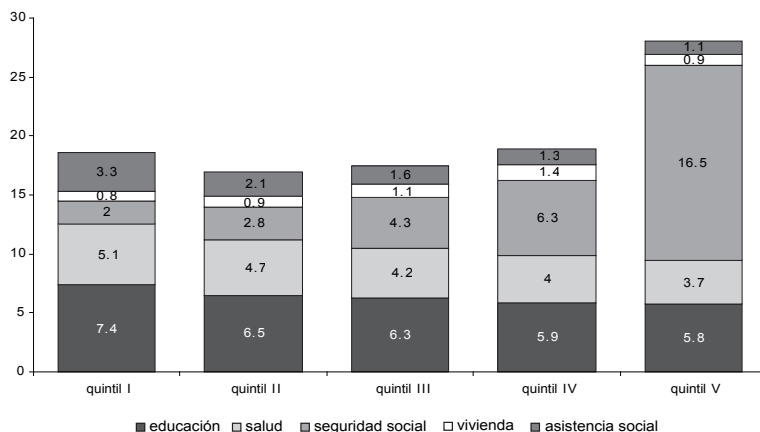


Fuente: CEPAL, 2007: 24

el medio se ubican México (lo que no refleja importancia como segunda economía de la región) que transfiere 10.2%; Chile, 13.1%; Colombia, 13.4%; y Honduras, 11.6% de su PIB al gasto social (gráfica 12).

En el gasto social sectorial, entre 1990-1991 y 2004-2005 el subcontinente elevó su gasto educativo de 3.3 a 4.3% del PIB; en salud de 3.1 a 3.4%; en seguridad y asistencia social de 5.3 a 7.0 y en vivienda permanece sin cambios en 1.2% (CEPAL, 2007). Dada la alta concentración de ingreso en el subcontinente, las inversiones públicas son crucia-

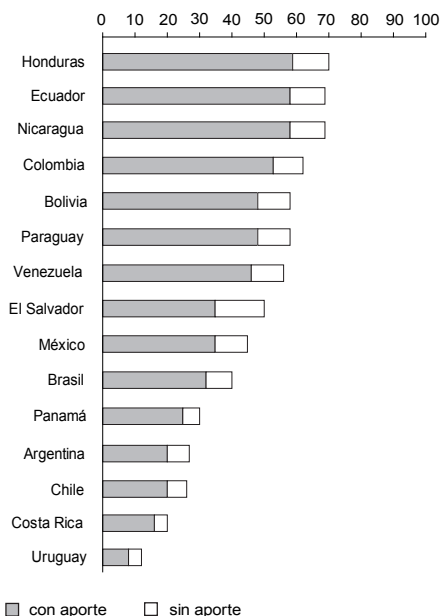
GRÁFICA 13
Estructura del gasto público según estratos de quintiles de ingreso primario (1997-2004; en % del gasto social total)



Fuente: CEPAL, 2007: 32

les, no sólo para mitigar directamente el hambre y la marginalidad, sino también para ofrecer a los niños un futuro, gracias a la mejoría en educación y salud. La distribución del gasto, de acuerdo con los cinco quintiles, muestra que en el primer quintil, los más pobres dedican 7.4% del ingreso a educación, 5.1% a salud, 2% a seguridad social y 3.3% a asistencia social (gráfica 13). El quintil V, de mayor ingreso, dedica menos, en porcentaje, a salud y educación, pero 16.5% a seguridad social. Estos recursos no sólo ofrecen a estos segmentos sociales mayor protección en caso de enfermedad, accidente, sino que garantizan también una vejez más digna. Además, este proceder es importante en el sector público, ya que representan ahorros públicos que podrían ayudar a equilibrar mejor las disparidades internas y crear la infraestructura requerida para el desarrollo y la mayor integración regional. No obstante, muchos de estos recursos son manejados por bancos y seguros transnacionales que no garantizan la capitalización necesaria a los países ávidos de recursos financieros escasos. Pero tampoco garantizan a los contribuyentes una vejez digna por los altos costos de la administración de dichos recursos y por los mecanismos especulativos en las bolsas de valores internacionales, en los que estas transnacionales aprovechan las ganancias y transfieren las pérdidas a los contribuyentes.

GRÁFICA 14
 Pobreza y apoyo económico de las mujeres. Pobreza del hogar y porcentaje de hombres y mujeres que trabajan

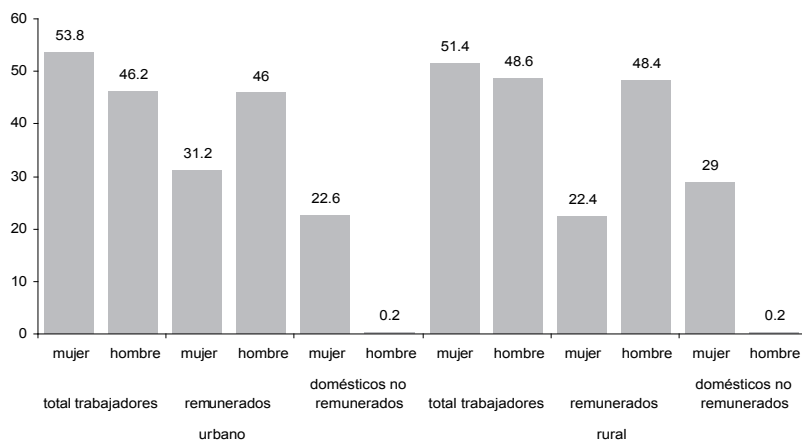


Fuente: CEPAL, 2004, Unidad de Mujeres y Desarrollo

Los bajos ingresos y el débil gasto público en la mayoría de los países se reflejan en la deficiente y mala calidad de los servicios públicos y privados. Todos los países latinoamericanos fueron reprobados en la evolución de educación PISA aplicada por la UNESCO (2008). Como ejemplo, en México asisten al último año de preprimaria 87.7% de los niños y 91.8% de las niñas; a la primaria, 97.1% y 96.7% respectivamente; a la secundaria, 72.4 y 71.8%; a la preparatoria, 52.3% y 55.1% y al nivel universitario, 20.2% de los hombres y 21.8% de las mujeres; pero sólo 8.5% y 7.1% concluyen el ciclo profesional, respectivamente. Una vez titulado, un número importante de profesionistas emigra de la región, en búsqueda de estabilidad laboral e ingresos, porque la estructura económica del país es incapaz de aprovecharlos (CEPAL, 2007) y los sueldos en otros países son más atractivos.

Con este panorama de amplia pobreza y rezago en todos los servicios públicos, es crucial el aporte de la fuerza de trabajo femenina re-

GRÁFICA 15
Trabajo total remunerado y trabajo doméstico no remunerado
entre género y diferencias urbano-rurales



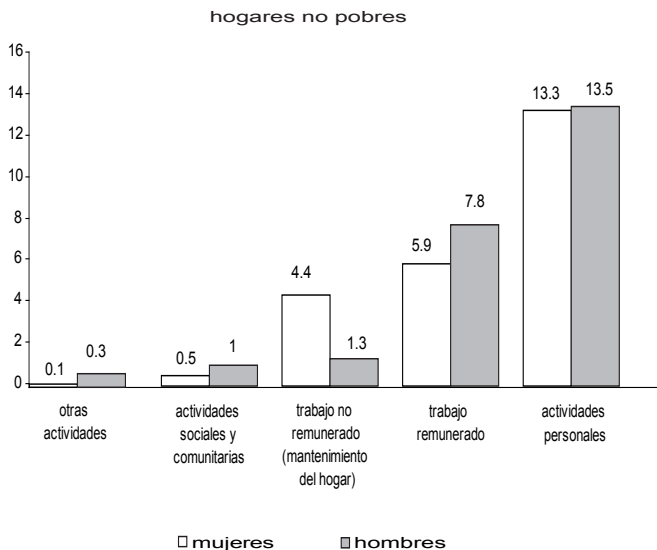
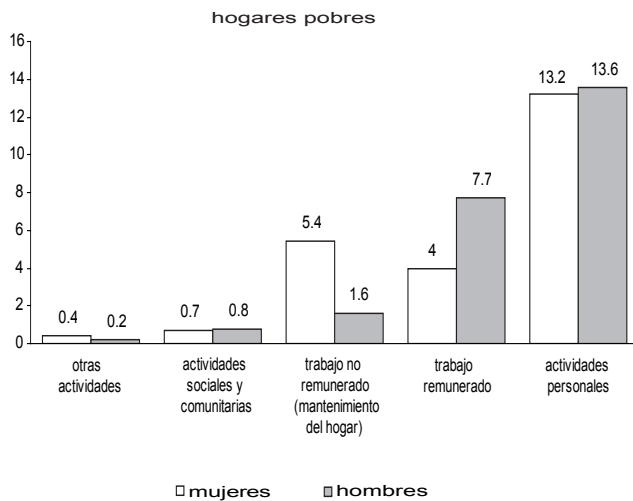
Fuente: CEPAL, 2004: Unidad Mujer y Desarrollo

munerada en los países más pobres de América Latina (gráfica 14). En zonas de mayor pobreza urbana, ellas han desarrollado estrategias de supervivencia (Oswald, 1991, 2007), y las mujeres se vinculan mayormente con la economía de solidaridad y con las cajas de ahorro popular (Collín, 2004; Cadena, 2003, 2005; Oswald, 2007b).

Pero no sólo en el sector formal de ingreso es fundamental el trabajo femenino, sino también en el doméstico no remunerado, porque la mujer estabiliza la unidad familiar con su tiempo (gráfica 15). Cuanto menos desarrollado el país, más trabajo femenino no remunerado se requiere en el ámbito rural y urbano para la reproducción de la unidad familiar. Las condiciones misóginas obligan a las mujeres no sólo a trabajar más horas, sino a que en el trabajo remunerado perciben 80% de los hombres, a pesar de tener una formación de 120%, comparada con el otro sexo (UNS, 2005). En cuanto a las tareas domésticas no remuneradas, tanto en el medio rural como en el urbano son responsabilidad de la mujer, lo que genera una escasez de disponibilidad de tiempo entre las mujeres (Damián, 2002).

Un estudio de caso (gráfica 16) muestra que el trabajo remunerado en uno de los países más pobres, Nicaragua, está mayormente en manos de hombres, aunque las mujeres participan cada vez más en el

GRÁFICA 16
Encuesta nacional sobre medición de niveles de vida,
Nicaragua, 1998



ingreso familiar, mientras que las tareas no remuneradas de la crianza y del mantenimiento del hogar y alimentación están básicamente en manos de las mujeres. Esto representa un proceso de sobreexplotación o de triple jornada para las mujeres, detallada en múltiples estudios sobre la división interna del trabajo en la unidad familiar (González, 2000; Helfrich, 2001; Dore y Molyneux, 2000). Además, es uno de los factores que aparentemente justifica la violencia intrafamiliar, tan frecuente y poco combatida legalmente. No sólo en Ciudad Juárez existe un número escandaloso de feminicidios; en toda América Latina se presenta una violencia basada en el género (Villarreal, 2002; ANAMURI/CLOC, 2002; Perpiñan, Villareal y Oswald, 2008; Oswald, 2007c, 2008; Lamas, 1996, 2002).

En estos problemas estructurales de pobreza, discriminación y violencia, pareciera que sólo la educación de mujeres y hombres —para la toma de conciencia de una nueva masculinidad y feminidad— podría establecer diferentes equilibrios dentro del seno familiar (Jiménez y Tena, 2007) y, por lo mismo reducir la sociedad altamente estratificada, jerárquica y violenta, en la cual han fracasado los patrones de un patriarcado ajeno a los procesos de modernización, equidad jurídica, de respeto a los derechos humanos y de equidad de género.

Para superar estos rezagos, es necesario no sólo aumentar la participación de las mujeres en la escolaridad, sino apoyar a las niñas con mejores resultados en su desempeño escolar, para que al terminar sus estudios encuentren empleo. En el mediano plazo, la mujer es un potencial de consolidación capaz de transformar esquemas patriarcales muy arraigados en todo el subcontinente (gráfica 15). Sin embargo, las estructuras tradicionales en los sistemas escolares, maestros depauperados por las crisis económicas, sistemas anticuados de formación de profesores, sindicatos charros y modelos retrasados de enseñanza aumentan la diferencia entre los países de América Latina y los asiáticos, por ejemplo. Los resultados de la UNESCO en la prueba de PISA (2007) ubican a los países más importantes de América Latina en los últimos lugares, lo que significa que el sistema escolar no sólo requiere de mayores recursos para su consolidación e infraestructura educativa moderna, sino también procesos de liberación de controles sindicales caciquiles y autoritarios. Sólo con un cambio estructural a fondo la mu-

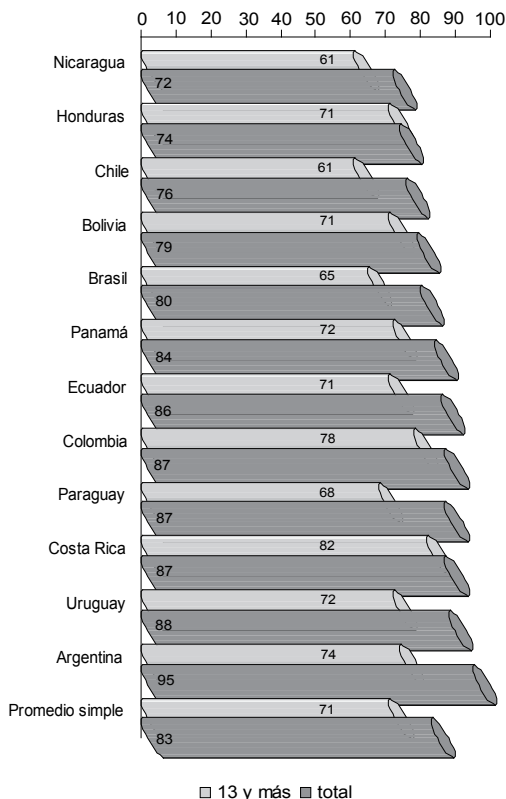
jer podría emprender los retos del siglo XXI, liberarse de prejuicios y superar los rezagos ancestrales.

En la gráfica 14 se indica que a mayor nivel de pobreza, mayor participación económica de las mujeres en el hogar y en ingresos externos; la unidad familiar exige múltiples entradas de dinero para poder sobrevivir, aunque sea en condiciones precarias. En todos estos países pobres, las mujeres se han convertido en pieza clave del ingreso monetario para sostener a sus familias y compensar los bajos ingresos de su pareja, frecuentemente afectado por el desempleo crónico (González, 2000). La pobreza genera estrategias de supervivencia (Oswald, 1991, 2007, 2008) y economía de solidaridad (Cadena, 2003, 2005; Collín, 2004) o autoempleo (Oswald, 2007d).

Este aporte de ingreso se suma al trabajo doméstico no pagado, lo que aumenta de manera importante la pobreza de tiempo, relacionado con diferencias de género (Damián, 2002; Dore y Molyneux, 2000; Lagarde, 1990). En América Latina existen además profundas diferencias entre áreas urbanas y rurales (De Mattos, 2003), aunque hay un comportamiento social muy similar. En ambas áreas el trabajo doméstico no se remunera. En el medio rural, la situación de la mujer es todavía más crítica por los trabajos en el campo y la feminización de la agricultura. En toda el área los hombres casi no participan en los quehaceres domésticos y se paga menos por los trabajos remunerados cuando los hace una mujer (gráfica 17).

Otro rezago en la equidad de género se presenta en las representaciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Aunque por primera vez América Latina cuenta con dos mujeres presidentas (Argentina y Chile, anteriormente Panamá), la participación femenina en el poder legislativo está subrepresentada (gráfica 18). Un sistema de cuotas —como en Europa— podría mejorar la equidad de género, aunque en diversos países los mecanismos de los partidos políticos han evitado que las mujeres tengan mayor acceso a la toma de decisiones. Las mujeres podrían impulsar procesos de mayor igualdad y equidad en la sociedad y romper los monopolios establecidos entre el ejecutivo y la burguesía criolla. Además, toda la región necesita mecanismos novedosos de control de corrupción, ya que en muchos países las inversiones públicas se asignan según el mayor beneficio personal del funcionario en turno, lo cual

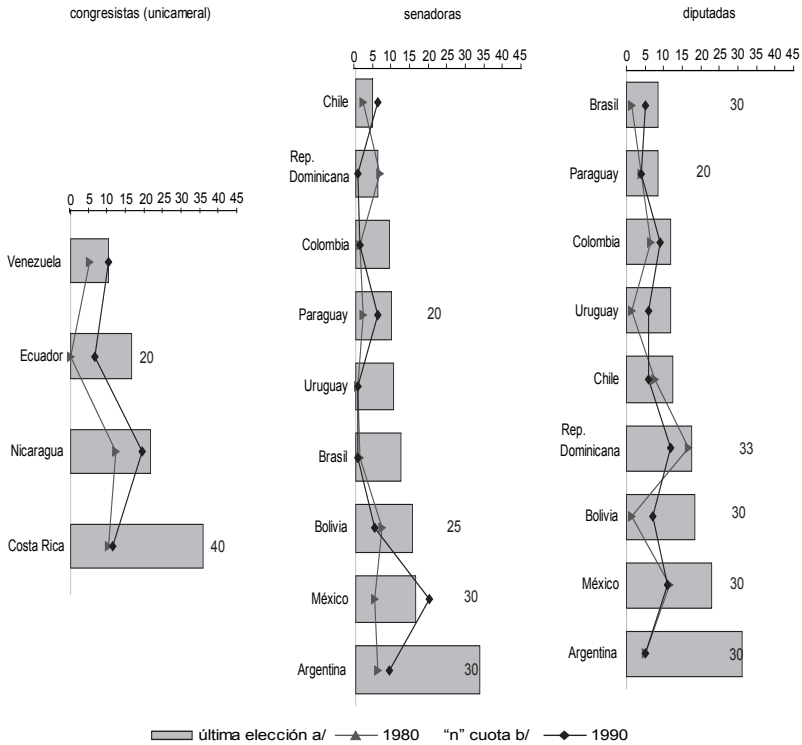
GRÁFICA 17
Educación e ingresos femeninos en relación con los hombres



La educación para las mujeres, particularmente la de ciclo superior, no tiene el mismo retorno que para los hombres, es decir no se traduce en igualdad de ingresos para los mismos años invertidos en educación

implica renunciar a un proyecto de país y eliminar los avances logrados hasta hoy. Lejos de que el gasto público beneficie al conjunto de la sociedad, se queda en el ejercicio de poder del presidente, quien todavía controla en los hechos el sector judicial y legislativo en la mayoría de los países y carece de escrutinio ciudadano. Estos procesos, junto con el aumento de los pobres, han creado una sociedad altamente estratificada: una élite relacionada con el capitalismo global y el resto de la sociedad rezagada en la miseria (Rojas y Goucha, 2002; Goucha y Rojas, 2003). México es un ejemplo del conjunto de problemas estructurales; no sólo

GRÁFICA 18
Participación de las mujeres en el sector legislativo



comparte una frontera de más de 3000 kilómetros con la superpotencia, sino que dispone también de abundantes recursos naturales y sociales. Pero carece aún de un proceso de democratización, y cuenta con una presidencia autoritaria y sin acotamiento del sector legislativo y judicial, una falta de transparencia en las obras públicas y los procesos gubernamentales, y de los más bajos niveles de recaudación de impuestos. De ahí que muestre una de las mayores desigualdades del mundo.

11.5 LA SEGURIDAD HUMANA NO ES SUSTENTABLE: EL CASO DE MÉXICO

Este modelo de desarrollo empezó desde los tiempos prehispánicos con los grandes emporios indígenas mexica y maya (similar al inca en

los Andes) y se consolidó gracias a los tributos, el trabajo forzado y la esclavitud. Fue perfeccionado con la Conquista española y profundizado a través del modelo neoliberal presente. Hoy día, hay flujos libres y globales de capital financiero, comercial y comunicaciones instantáneas, mientras que el movimiento de las personas se enfrenta a barreras físicas (una barda de metal) y límites legales. Por lo mismo puede ser tomado como ejemplo para el resto del subcontinente.

A partir de 1976 se agotó su modelo de sustitución de importaciones y el país sufrió múltiples crisis económicas. La más severa fue la crisis de 1994 y la mayoría de la población aún no se ha recuperado. Fue resultado de las políticas neoliberales impuestas por parte del FMI y de los errores cometidos por los gobiernos tecnocráticos. Los procesos de privatizaciones poco transparentes durante el régimen de Salinas (1988-1994) y Zedillo (1994-2000) y la dilapidación de la renta petrolera de Fox (2000-2006) han agudizado la desigualdad interna. A raíz de la firma del TLCAN se incrementó la importación de alimentos básicos desde Estados Unidos, lo que ha generado desequilibrios en la balanza de pagos. A partir de 1994, las importaciones agropecuarias se han incrementado en 176%, mientras que las exportaciones lo hicieron en 50%. La política agropecuaria equivocada ha debilitado la soberanía alimentaria: 33% del maíz⁶ es ahora de importación, 55% de trigo, 95% de soya (cuando antes México era exportador), 72% de arroz, 22% de cebada y 55% de algodón. El financiamiento real del sector primario cayó 90% y de octubre 2006 a septiembre 2007 se importaron 1 886 mmd en granos forrajeros (maíz y sorgo), lo que equivale casi el presupuesto de PROCAMPO.

Esta política equivocada afectó también la balanza de pago: durante los catorce años del TLCAN se importaron 127 mmd y se exportaron 106 mmd. Las asimetrías entre los dos sistemas productivos son evidentes: un productor norteamericano recibe 20 000 USD en subsidios y un mexicano 700 USD. Antes de entrar al GATT, México destinaba al gasto rural 2.4% del PIB y en 2007 esta inversión alcanza menos de 1%. La falta de capacidad administrativa (¿corrupción?) del gobierno mexicano ha dejado de cobrar 4.5 mmd en aranceles sólo

⁶ Sinaloa informó en enero de 2008 que cuenta con 400 mil toneladas de maíz de su cosecha del año pasado y no encuentra comprador, mientras que los 2 a 3 millones de toneladas de importación pueden colapsar el precio interno.

para la importación de maíz, y de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, entre 1991 y 2006 se han perdido cinco millones de empleos rurales, de los cuales tres millones de personas han emigrado hacia Estados Unidos. La competitividad como país hace que México se ubique en el lugar 55 entre 80 naciones. Ante la falta de estímulos gubernamentales hacia el sector agropecuario, únicamente 6% de los productores rurales mexicanos son competitivos, 18% se ubican en un proceso de transición y 76% nunca lograrían eficiencia y tendrán que emigrar. Pero el TLCAN ha impactado también a la canasta básica del sector popular al subir 436%, mientras que el salario mínimo aumentó en el mismo periodo 176% y la tortilla, el alimento básico, se incrementó en más de mil por ciento desde 1994 (Cámara de Diputados, enero 2008).

Al lado de la debacle rural, se han reducido los ingresos gubernamentales por la venta de empresas redituables. En términos generales se han privatizado empresas públicas altamente redituables (por ejemplo, Telmex, bancos, carreteras). Ante la quiebra de bancos y otras empresas, el gobierno las ha rescatado con fondos públicos, los han saneado y los han vuelto a privatizar. Así, las ganancias se privatizan (bancos privados rescatados con FOBAPROA), mientras que las pérdidas se han socializado. Ello ha provocado aumentos en los precios, donde sólo los productos básicos en 2007 aumentaron en forma de canasta básica en 48%, mientras que el aumento del salario mínimo era de 4% (Banco de México, 2007). El poder adquisitivo de los sectores de bajos ingresos se ha acotado aún más y ha fortalecido a la burguesía criolla, que se ha integrado con el capital transnacional, y sus fortunas se han convertido en motores de la economía mundial y no de su país.

Las tablas 3 y 4 explican la concentración enorme del ingreso en México. Dos indicadores diferentes arrojan una situación similar: alrededor de .23% de la población es dueña de 40.3% de los bienes del país y de 78% de los ahorros nacionales. En términos de ahorro bancario: 0.07% de mexicanos dispone de 63% de los ahorros nacionales. Esta desigualdad extrema en la riqueza no sólo genera inconformidad social y política, sino que restringe el poder adquisitivo de las mayorías y, por lo mismo, limita el crecimiento del país por la falta de un mercado interno, lo que incide en la falta de empleos dignamente remunerados. Ante una recaudación deficiente, el Estado no dispone de recursos su-

TABLA 3
Concentración del ahorro bancario

cuentas	núm. de cuentas bancarias	% de población mexicana	% de los ahorros nacionales
más de 1 millón MN	73 481	0.07	63.0
más de \$ 1 000 MN	16 027 000	14.6	s.d.
menos de \$ 1 000 MN	15 700 000	14.2	s.d.

Fuente: Banco de México, 2004

TABLA 4
Estratificación social y ahorros bancarios en México

estrato social	% de población	% de la riqueza nacional	% de los ahorros financieros
muy ricos	0.23	40.3	78.0
trabajadores	52.7	18.4	10.0

Fuentes: INEGI y Banco de México, 2004

ficientes para educación, salud, infraestructura y promoción productiva. Al carecer de oportunidades económicas y proporcionar servicios lamentables de educación y salud, se afecta el futuro de las generaciones venideras, estancadas en procesos de miseria y desnutrición.

Los resultados de estos procesos complejos de desigualdad se agudizan internamente, con disparidades entre géneros, sectores sociales, rural-urbano, indígenas-no indígenas, jóvenes-ancianos. En combinación con un sistema judicial ineficaz y corrupto aumenta la violencia y el crimen organizado transnacional. Un intento de cuantificación de oportunidades perdidas de México puede apreciarse en la tabla 5. Con base en informaciones oficiales, datos estadísticos y análisis científicos se trató de calcular las pérdidas del PIB, que se presentan en México. Las pérdidas asciendan a casi la mitad del PIB y se pueden agrupar en tres rubros: por una parte, se refieren a una administración ineficiente con falta de transparencia y favoritismo. En segundo lugar, están relacionadas con la falta de un estado de derecho con equidad jurídica; y en tercero, se vinculan con la falta de oportunidades aprovechadas, sea en términos de un manejo integral de los recursos naturales y de la renta petrolera, sea en la capacitación y educación de la población. El conjunto de estos factores genera un proceso de estancamiento estructural y bajas tasas de crecimiento. La falta de equidad impide que grupos amplios tengan oportunidades y por ende, se afectan sus derechos humanos, pero sobre todo sus derechos sociales. Y otra vez, los beneficiarios de estas fugas, ineficiencias

TABLA 5
Estimación de la pérdida económica en México
en porcentajes del PIB

Conceptos	Pérdidas	Inversiones gubernamentales	Pérdidas totales
Ambiente ¹	9.5	5.5	4.0
Reducción en inversiones públicas ²	3.0 (2003)	10.0 (desde 1983)	7.0
Crimen, violencia pública ³	5.5	0.5	5.0
Corrupción ⁴	6.9	0.2	6.7
Excesivos gastos públicos ⁵	8.3	5.8	2.5
Privatizaciones dudosas y posteriores rescates ⁶	8.0	1.2	6.8
Fidecomisos fuera de control gubernamental ⁷	1.73	0.87	0.87
Evasión de impuestos ⁸	20.0	15.0	5.0
Deudas fiscales y arreglos judiciales arbitrarios ⁹	2.1	0.0	2.1
Retorno de inversiones extranjeras ¹⁰	0.88	0.0	0.88
Ciencia y tecnología, fuga de cerebros ¹¹	2.0	0.6	1.4
Ineficiencia educativa ¹²	7.0	4.8	2.2
Déficit en la balanza de pago ¹³	0.3	0.0	0.3
Servicio de deuda externa e interna ¹⁴	2.4	0.0	2.4
Pobreza perversa, mortalidad infantil previsible ¹⁵	7.0	5.0	2.0
Total			49.14

¹ SEMARNAT, 2004, 2007; INEGI 2004 y 2007: Cuentas ambientales. Incluye extracción del petróleo menos la inversión, deforestación, pérdida de la biodiversidad, desastres naturales, erosión, contaminación del agua, agotamiento de acuíferos y su contaminación, mal manejo de desechos domésticos y peligrosos (CRETIB).

² INEGI, 1983 y 2004.

³ Estimaciones del Concejo Ciudadano contra la Violencia, 2004.

⁴ Estimaciones del Banco Mundial, 2003.

⁵ Estimaciones basadas en ajustes del presupuesto por el Congreso: Pensiones de 9.3 mmp de empleados menores y sólo 0.009% de funcionarios de altos niveles reciben 84 mmp, lo que aumentó el gasto por servicios personales durante 2003/2004: 11.8%.

⁶ Banco Mundial y Congreso, 1998-2004.

⁷ Estimaciones de Lotería Nacional, Vamos México, SSA, Congreso, 2004-2005; revisión de cuenta gubernamental, 2007.

⁸ Estimaciones basadas en datos de la SHCP, IMF, 2004; la economía informal representa 12% del PIB y no paga impuestos. En el empleo informal hay 612,209 personas en diciembre de 2000 y 1 092 692 personas en junio de 2004 (aumento 78.5% en 3 ½ años, más 1.2 millones de jóvenes que ingresan como fuerza de trabajo/año. 1% del PIB crea 200,000 nuevos empleos (Mario Di Constanza, agosto de 2004).

⁹ SHCP, IMF, Banco Mundial, 2004.

¹⁰ IMF e INEGI, 2004.

¹¹ Estimaciones basadas en datos y estimaciones de CONACYT, Congreso, INEGI, 2004.

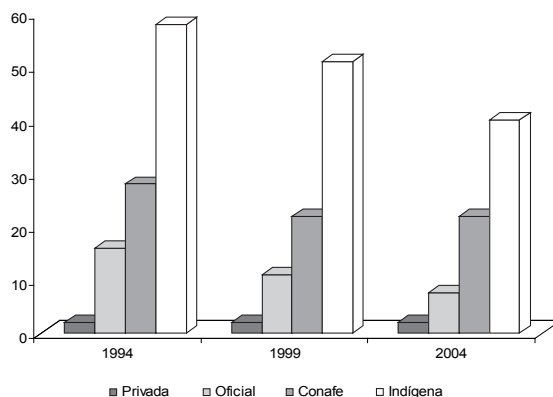
¹² Estimaciones con datos de SEP, 2004; INEGI, 2004; Banco Mundial, 2004; PNUD, 2004.

¹³ Congreso y SHCP, 2004.

¹⁴ SHCP, Banco de México, IMF, 2004, durante el primer semestre de 2004: 88 844.1 millones de pesos pagados para deuda interna (33 054.7 millones MN) y externa (36 838 pesos MN), otros servicios de deuda: 18 951.4 millones de pesos MN.

¹⁵ Estimaciones con datos de SEDESOL, Informe Presidencial, PNUD, Banco Mundial, 2004.

GRÁFICA 19
Talla baja en escolares de México según tipo de plantel escolar



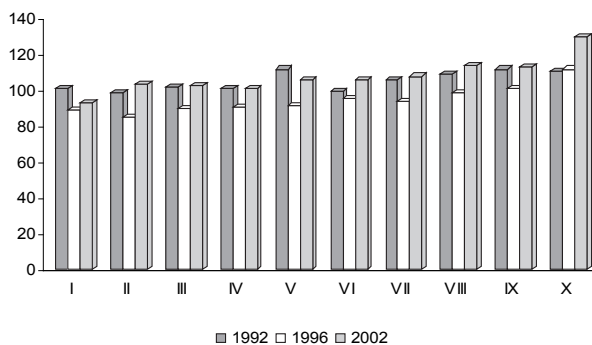
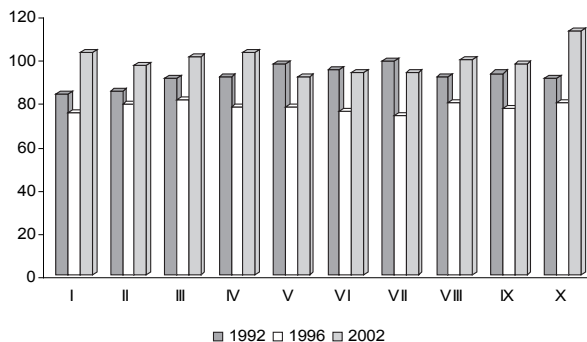
Fuente: Censos Nacionales de Talla, 1994, 1999, 2004; datos en Chávez, Ávila, Shamah, 2007: 215

y corruptelas son los empresarios mexicanos y transnacionales, y los funcionarios públicos que no pagan impuestos, o cuando pagan, cuentan con tantas deducciones que la recaudación finalmente representa menos de 1% sobre sus ganancias netas (Bimbo, Bachoco), además de que reciben mayormente los subsidios y apoyos.

Las repercusiones de esta política antisocial y clasista se reflejan en la desnutrición: en los niños indígenas persisten las tallas bajas, y hay una desnutrición leve entre los niños que atienden las escuelas públicas (gráfica 19). A pesar de los desayunos escolares, estos niños no cuentan con los requerimientos energéticos y proteicos para concentrarse y aprender adecuadamente, lo que limita su futuro desempeño escolar y, posteriormente, su inserción en el mercado de trabajo e ingreso, al convertirlos en ciudadanos de segunda categoría por su desnutrición crónica, reflejada en un crecimiento insuficiente y daños cerebrales.

La gráfica 20 revisa los requerimientos energéticos globales en el seno de la familia, aunque existen diferencias internas, porque normalmente el padre de familia y los hijos mayores se apropian de los alimentos de mejor calidad. Aun así, los datos muestran que en México persisten insuficiencias alimentarias. La dieta que domina entre los estratos sociales bajos (deciles I-IV) es rica en carbohidratos y grasas, lo que aumenta la obesidad y por ende, las enfermedades cardiovasculares y degenerativas, sumada a la desnutrición materno-infantil que inhibe

GRÁFICA 20
Adecuación de requerimientos energéticos de los nutrientes, por deciles de ingresos, entre comunidades urbanas y rurales



Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares 1992 a 2002

el crecimiento. Con mayor disponibilidad de calorías aumenta la obesidad, sobre todo cuando la televisión promueve refrescos y alimentos chatarra como panacea alimentaria. Asimismo resalta la desnutrición crónica en el medio rural, donde deberían producirse los alimentos. Esta contradicción es resultado de la fallida política agropecuaria a partir de la anulación del programa Sistema Alimentario (SAM) en México después del gobierno de López Portillo (1976-1982), que con la política equivocada del TLCAN, ha promovido la importación de alimentos básicos a costa de la producción propia, lo que ha deteriorado la soberanía alimentaria del país.

A su tiempo, la comparación longitudinal entre la desnutrición urbana y la rural hace ver que los estratos sociales más bajos se están recuperando de la severa crisis de 1994, donde la gente pobre se vio

obligada a sustituir alimentos ricos en proteínas por aquellos de menos valor nutricional. En el medio rural los más pobres obtuvieron apoyos a través de los programas de Solidaridad/Oportunidad, lo cual se refleja en cierta mejoría, mientras que al decil II, aunque ha mejorado su ingesta, todavía le falta llegar al óptimo. Por último, la insuficiente ingesta en el medio rural es persistente entre diversos estratos socioeconómicos, lo que significa que las transferencias del medio rural hacia el urbano siguen depauperando sectores sociales que antes tenían poder adquisitivo. La crisis estructural es mucho más profunda que la públicamente aceptada y obliga al gobierno a compensar con programas específicos e inversiones públicas esta deficiencia. Ante este cuadro de expectativas truncadas no sorprende que se hayan dado agudos procesos de migración rural-urbanos para superar los rezagos en el medio rural. Hoy día, los jóvenes emigran no sólo hacia las zonas conurbadas de las capitales estatales y la megalópolis, sino también fuera del país con todos los riesgos que implica un cruce ilegal. Según la OCDE (2008) 12 millones de mexicanos (9.4% de los nacidos en México) viven en el exterior y 30 de cada 100 personas con estudios superiores abandonan el país. Además, medio millón de jóvenes se integró al narcotráfico (Cámara de Diputados, 2008).

La respuesta gubernamental es mínima: la suma de los presupuestos federales en educación, salud, trabajo, seguridad social y combate a la pobreza representaba 6.7% del producto en 1981, en 1986 ya eran menos de 5% y alrededor de 4% en 2003... las erogaciones *per cápita* en salud, públicas y privadas en México ascendían a 544 dólares (2001), mientras en los países industrializados eran entre tres y diez veces superiores (Ibarra, 2007:40).

Si a estos hechos se añade la falta de eficiencia en los procesos productivos, corrupción en todos los sectores gubernamentales y una política restrictiva de crecimiento económico, todos estos esfuerzos emprendidos en México son insuficientes para resolver los problemas severos de seguridad "suave" (pobreza, inseguridad alimentaria, desertificación, escasez de agua, educación, salud), que no sólo ponen en peligro la estabilidad interna del país, sino que limitan también el potencial de los recursos humanos, sociales y ambientales existentes y por ende, el futuro de la nación; México debe superar sus graves problemas estructurales.

No obstante la seriedad de estos datos empíricos que muestran un severo deterioro de la seguridad social, alimentaria y humana, el discurso presidencial en 2008 no retoma el reto de la seguridad humana. Su preocupación se centra en la seguridad nacional (por la presión del presidente Bush), el control de terroristas y guerrillas y el combate al narcotráfico y crimen organizado.⁷ Los resultados después de un año, aun en esta área prioritaria, son pobres: el número de asesinatos por el crimen organizado ha aumentado durante 2007 (2794 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico en México).⁸ Dado que el narcotráfico está relacionado con la demanda de estupefacientes en Estados Unidos, 90% de la cocaína consumida pasa por México (USDS, 2007:177). Mientras no se controle el consumo de drogas en los Estados Unidos, con una legalización parcial y tratamientos médicos para los adictos, los éxitos reportados por la confiscación de droga sólo aumentan el precio, pero no disminuyen la demanda, ni reducen la violencia asociada. Mediante la “Iniciativa Mérida”, México podría recibir inicialmente 500 md para su país y 50 md para siete países centroamericanos de los 1.4 mmd calculados, aunque todos los recursos están sujetos a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Tampoco se entregará en forma de recursos frescos, sino en equipamiento (60% en helicópteros), asesoría militar y soporte de inteligencia por parte del gobierno norteamericano. A cambio, México se ha comprometido a adquirir material bélico adicional con su vecino del norte por cinco a siete mmd, lo que muestra que el negocio sigue en la seguridad militar de aquel país, ajeno a las necesidades de México.

⁷ CNN, 14 de enero de 2008 informa que “en 2006, 710 toneladas de droga pasaron por México y Centroamérica desde América del Sur con destino a los Estados Unidos y que se han producido 12 700 libras de heroína el año pasado en México”.

⁸ Se calcula que en Guatemala hayan aumentado las muertes violentas en 11.7% por el crimen, con más de 6 mil personas asesinadas (PFP, 2007).

11.6 CONCLUSIÓN: SEGURIDAD HUMANA SIGNIFICA REDUCIR DESIGUALDAD SOCIAL, AUMENTAR EQUIDAD Y CREAR MECANISMOS DE ADAPTACIÓN ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES

La ONU señala que la migración interna e internacional está relacionada con las tres D: diferencias de desarrollo, demografía y democracia, mientras que los factores de atracción están en otras 3 D *demanding, dangerous, dirty* (demanda, peligro y suciedad). América Latina cuenta con cerca de la mitad de la población con empleos precarios o en el sector informal, sin seguridad social, sin seguro de salud ni de desempleo y sin jubilación al fin del ciclo productivo. Estos procesos hipotecan el presente, pero también el futuro del subcontinente, que cuenta con recursos abundantes.

Al revisar las posibilidades del subcontinente para lograr las mdm, llama la atención que Haití, no sólo por su inestabilidad política interna, sino también por su destrucción ambiental y los problemas estructurales de pobreza y débil inversión pública, tenga pocas oportunidades de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes (gráfica 21). Cuba representa una excepción y a pesar de estar acosada desde décadas por un embargo económico, ha podido ofrecer servicios públicos de calidad, como es una excelente escolaridad y salud a todos sus habitantes. Un sector de alta vulnerabilidad en América Latina son los niños menores de cinco años, ya que la desnutrición crónica materna-infantil limita su futuro desarrollo y la inserción en mejores condiciones al mercado de trabajo (Oswald, 2007b; Chávez *et al.*, 2007). Los países centroamericanos son los más proclives a no cumplir con las mdm, tanto en el mejoramiento de la alimentación infantil como en la atención de salud (Adams, 2005). Bolivia, Brasil, Colombia, México y Paraguay requieren mayor atención hacia los grupos vulnerables indígenas y rurales, mientras que Chile, Argentina, Uruguay y Jamaica representan modelos de atención de infancia hacia los otros países. Sólo estos países con Ecuador, Guyana y Perú tendrán la capacidad de cumplir cabalmente con las mdm para el sector infantil y con las metas más ambiciosas de la FAO en términos de erradicación de la desnutrición infantil crónica.

GRÁFICA 21
MDM para la erradicación de la desnutrición infantil

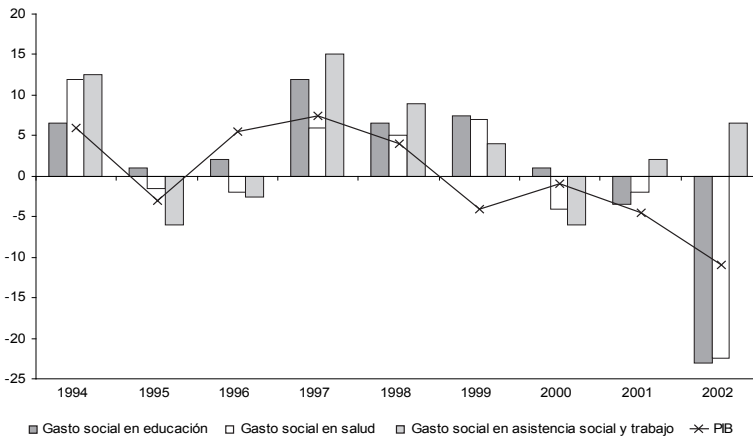
		Desnutrición infantil (insuficiencia ponderal moderada grave)		
		No cumplirían meta	Cumplirían meta del milenio	Cumplirían meta más exigente basada en la meta establecida en Cumbre Mundial a favor de la infancia de 1990
desnutrición	No cumplirían meta	El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	Cuba Haití Trinidad y Tobago Venezuela Bolivia	Panamá Rep. Dominicana
	Cumplirían meta del milenio		Brasil Colombia México Paraguay	Costa Rica
	Cumplirían meta más exigente basada en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996		Ecuador Guyana Perú	Argentina Chile Jamaica Uruguay

Fuente: CEPAL, 2004 con base en los datos de FAO

Los mayores problemas para otorgar mejores servicios públicos y políticas gubernamentales compensatorias se relacionan con recursos fiscales limitados. Los países con gobiernos progresistas han intentado recuperar cierta soberanía sobre sus recursos naturales (Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay). Argentina y Brasil se liberaron de las imposiciones del FMI al liquidar por anticipado sus deudas y Brasil desarrolló un programa “Cero Hambre” para consolidar su soberanía alimentaria. Todos estos procesos permiten retener ingresos dentro de la administración pública y, manejados con honestidad, ofrecerían nuevas oportunidades de desarrollo en la región.

Finalmente, el aumento del comercio regional en el marco del MERCOSUR ha abierto, sobre todo a todos los países del Cono Sur, una oportunidad de crecimiento, ajena a los términos de intercambio desigual en el mercado internacional, aunque Brasil cuenta con mayores beneficios. La creación del Banco del Sur, donde se invertirán las reservas de los países miembros, representa otro detonador de desarrollo en la región Sur. El acceso a recursos para crear infraestructura en carreteras, oleoductos, agua potable, plantas petroquímicas, industrias, puertos y ferrocarriles, provenientes de recursos propios, hará que la mano de obra, la tecnología y la renta se queden en la región y no en manos del

GRÁFICA 22
Gastos sociales pro-cíclicos en educación y salud durante la crisis 2001-2002 y contra-cíclicos para compensar los efectos sociales de las crisis



Fuente: Gobierno de Argentina, 2004

gobierno norteamericano, o los bancos transnacionales, como se pretendía con la firma del ALCA.

Las graves crisis económicas que azotaron al subcontinente durante los ochenta y noventa parecieron haber encontrado cierta salida, con la ayuda de gobiernos más progresistas y administraciones más transparentes, donde mecanismos macro-económicos más estables y procesos internos de compensación abren un panorama mejor en el subcontinente. La gráfica 22 muestra cómo Argentina, durante su grave crisis económica entre 2001 y 2002, utilizó procesos contra-cíclicos y pro-cíclicos para mitigar los efectos más negativos. El país ha compensado con apoyos en asistencia social y capacitación para el trabajo —a costa de salud y educación— la pérdida de los empleos y la depauperación a raíz del “corralito”. Con esta política el país se recuperó rápidamente de la profunda crisis, la confianza en el mercado interno sigue creciendo y con ello el empleo y el bienestar de la población.

En relación con las preguntas planteadas al principio del capítulo se puede afirmar que todos los datos, a lo largo de las crisis reiterativas de América Latina, muestran que la globalización sin mitigamiento

gubernamental afectó más a los socialmente vulnerables. Asimismo, se vio que las políticas macroeconómicas relacionadas con la globalización, comercio hemisférico (TLCAN, CAFTA) y las imposiciones del FMI con su programa de ajuste estructural (PAE) han debilitado el sector campesino y el sector urbano popular en América Latina. Los beneficios potenciales de la globalización fueron aprovechados por una élite o burguesía criolla que ha logrado insertarse entre los más importantes capitales mundiales. Por ello, la renta del subcontinente sigue concentrándose en unas pocas manos, lo que aumenta la desigualdad, y los sectores de más bajos recursos han enfrentado dificultades de supervivencia, mitigadas por la migración rural-urbana e internacional. Los múltiples movimientos de inconformidad y la votación por gobiernos progresistas en diversos países muestran que el margen de estabilidad política está llegando al límite. Los sectores depauperados exigen a sus gobiernos mayor transparencia y un reparto de la renta nacional más justa. No obstante, en esta demanda está el mayor conflicto: la burguesía no está dispuesta a compartir sus ganancias, la recaudación fiscal es todavía insuficiente y los programas sociales compensatorios no han podido superar los obstáculos estructurales de la desigualdad. Los catorce puntos arriba que debería tener América Latina en el coeficiente Gini muestran el acaparamiento de la renta nacional en pocas manos y la falta de solidaridad de esta burguesía, pero también la ausencia de un proyecto nacional y subcontinental de largo plazo.

El comportamiento explotador de esta burguesía puede atribuirse a procesos causales basados en estructuras culturales, donde precisamente la estructura simbólica (Habermas, 1975, 1989, 2000) genera comportamientos abusivos, cuando no se toma en cuenta la historia. Esta burguesía sólo imita y se alía con transnacionales y gobiernos poco transparentes, gracias a sus conocimientos internos. Comparten la única finalidad que es el lucro, independientemente de los costos ambientales, sociales o políticos. Su capacidad de destrucción y saqueo obedece a la falta de transparencia gubernamental, a tecnócratas insensibles e incompetentes ante problemas socio-ambientales y sin sensibilidad social y preocupación por la gobernabilidad. Los extremos de desigualdad social existentes obligan al conjunto de la sociedad (incluidas autoridades y burguesía) a llevar a cabo un pacto nacional para impulsar el crecimiento

del país con sustentabilidad, a crear empleos, a consolidar la infraestructura y así apoyar especialmente a los más indefensos para superar su vulnerabilidad y convertirlos en ciudadanos plenos en el futuro de América Latina. Esto significa, junto con la justicia y la sustentabilidad, que todos los gobiernos, pero sobre todo los progresistas deberían enfocar sus políticas hacia la igualdad de oportunidades para que estos grupos rezagados puedan desempeñarse como ciudadanos activos y como recursos valiosos para su país y la región. Ello va más allá de los principios kantianos del comportamiento ético de las instituciones (véase cap. 2) y abarca la solidaridad con los otros, dentro de un proceso de pluralidad y alteridad mutua (Ricoeur, 2001) y en el entendido del *homo donans* de Vaughan (1997, 2004).

A su tiempo, los gobiernos del Cono Sur se dirigen hacia modelos de desarrollo más incluyentes que evitan fugas de capital hacia el exterior, mediante la integración comercial del Mercosur y ahora del Banco Sur común. Invierten sus reservas para el fomento de la infraestructura y el bienestar de su población, en lugar de reservas en dólares expuestas a devaluaciones y recesión. No cabe duda que los términos de solidaridad, justicia, sustentabilidad y solidaridad se integran al planteamiento de seguridad humana (Rojas, cap. 15; Fuentes, 2008), lo que permitiría a todo el subcontinente superar los rezagos e impulsar procesos de redistribución de riqueza. Esta visión no es compartida por el gobierno de México ni por la mayoría de los países centroamericanos, y como consecuencia, las brechas y conflictos internos se están agudizando. En el área mesoamericana, los gobiernos imitan la visión norteamericana e intentan controlar la inconformidad social mediante la seguridad militar y la represión de los movimientos sociales, aunque la historia pasada les ha enseñado que este camino lleva únicamente a mayor sufrimiento, más desigualdad y destrucción, y también a inestabilidad política. Ante este complejo panorama sería importante que esta región se vinculara más estrechamente con los otros países latinoamericanos, para distanciarse con dignidad de las presiones norteamericanas y de los acuerdos comerciales desventajosos, y emprender una senda propia de seguridad humana para todos, con especial cuidado hacia los más vulnerables. El tiempo y la paciencia de la población relegada se agotan; urge rectificar los caminos erróneos.